

Perú está lejos del Plata

PARA los que, en la confusión de estos días, apuntan al Perú en busca de similitudes fáciles, es que intentamos la reconstrucción del largo camino que recorrieron las Fuerzas Armadas de aquel país para llegar al gobierno.

A diferencia del Uruguay, que no conoció ningún pronunciamiento militar en lo que va del siglo hasta el jueves de la semana pasada, el Perú registra una larga lista de alzamientos, sublevaciones y golpes de mano, así como la permanente conmixión de intereses entre el poder civil, tradicionalmente oligárquico, y el militar.

Cuando aquí el presidente Gabriel Terra iniciaba su gobierno, que después degeneró en dictadura, allá dio su golpe militar el coronel Sánchez Cerro. De entonces a ahora han corrido cuarenta años.

A Sánchez Cerro lo asesinaron, y lo sustituyó el entonces general —mariscal después— Oscar Benavidez, que se mantuvo en el poder hasta 1939. En ese año, mediante elecciones dirigidas, lo sucedió Manuel Prado hasta 1945. Éste, hijo de presidente, banquero, jefe de uno de los grupos económicos más poderosos del país, fue un auténtico representante de la plutocracia limeña. Como tal sirvió a satisfacción a la línea política de la Defensa Hemisférica impuesta por Estados Unidos. También a los intereses hegemónicos del grupo militar que acaudillaba su antecesor: de ese tiempo son la invasión al Ecuador, el despojo a éste de cien mil kilómetros de territorio y el Pacto de Río. Oligarquía y Fuerzas Armadas marchaban, unidas, al mismo paso.

Cuando, en el 45, terminó la guerra mundial se produjo una distensión. De acuerdo con la constitución el gobierno llamó a elecciones y por tres años se estableció un régimen civil, o, mejor dicho, civilista. Pero José Luis Bustamante y Rivero no cumplió su período. Nuevamente apareció la presión militar: en octubre de 1948 el general Manuel Odría lo derrocó e impuso la dictadura. Dos años como provisional, seis como constitucional, Odría ejerció el poder. Al final de su mandato lo cedió, mediante "elecciones", a Manuel Prado, quien nuevamente lo recibía de manos de un militar. El binomio Benavidez-Prado duró del 33 al 45; el binomio Odría-Prado lo haría del 48 al 62. La alianza de militares y banqueros gobernó al país casi ininterrumpidamente, durante veintinueve años, sólo con tres personeros.

Próximo a caducar el período constitucional de Prado y ya realizadas las elecciones para la sucesión (Haya, Belaúnde y Odría candidatos) mientras se discutía la validez del acto, un golpe

derrocó a Prado, anuló las elecciones "por fraudulentas" y mediante una Junta Militar copó el gobierno. La presidió el general Pérez Godoy que meses después sería sustituido por el contralmirante Lindley. Esta Junta llamó nuevamente a elecciones y como consecuencia resignó el mando ante Víctor Belaúnde, el candidato triunfante.

Este golpe militar de 1962 marca el fin de la unidad entre plutócratas y militares. La expulsión de Prado es del 18 de julio; pero ya tres meses antes, los militares habían presentado al gobierno un plan de reformas cuyos postulados esenciales comprendían entre otros: reforma agraria, nacionalización del petróleo y control de divisas. Había sido preparado en el CAEM (Centro de Altos Estudios Militares), dedicado, desde tiempo atrás, a estudiar los problemas de planificación y desarrollo del país.

El plan desechado por Prado, coincidía, en términos generales con la plataforma electoral de Belaúnde. Un discreto apoyo le ofreció la Junta, y el arquitecto, planificador y desarrollista, que había prometido "la conquista del Perú por los peruanos mediante la Acción Popular" asumió el 28 de julio de 1963.

En su discurso de toma de posesión el nuevo presidente prometió: "La reivindicación total de La Brea y Pariñas en un plazo de noventa días".

La reivindicación prometida no era nada más ni nada menos que la expropiación y nacionalización de la IPC; punto fundamental en el plan de reformas de los militares. Pero pasaron veinte veces noventa días y el esperado rescate del petróleo no se produjo.

A lo largo de los cinco años de su gobierno, Belaúnde, que empezó muy bien, fue cayendo paulatinamente en un inexplicable proceso de desprestigio. El cohecho, la corrupción, los delitos económicos, las maniobras cambiarias, el contrabando, el despistar, la demagogia, minaron sus bases de poder. Al comenzar su último año intentó la reivindicación prometida. Negoció con la IPC y concluyó con ella un acuerdo ruinoso para el país. El 28 de julio —fiesta nacional— de 1968, anunció el arreglo definitivo con la empresa; el 13 de agosto proclamó el "Acta de Talara", un inconcebible documento de enajenación y entrega. Para colmo, los representantes de la empresa robaron una página del contrato —la famosa página once— lo que transformó la tensión existente en un escándalo nacional. Los representantes militares en el gabinete mantuvieron cuidadosa reserva, mientras los mejores aliados políticos del presidente señalaban discrepancias y se alejaban de él.

La Brea y Pariñas representaba el punto clave. La IPC había maniobrado exitosamente con

todos los anteriores gobiernos, mediante la corrupción. Así, por ejemplo, había logrado durante treinta y cuatro años pagar impuesto por cuarenta hectáreas denunciadas, mientras ocupaba 166.450. Durante ese tiempo pagó como regalía total, cincuenta dólares anuales. Se convirtió así la IPC en el símbolo de la dependencia y, en la política interna, de la venalidad. La opinión pública no admitía distinciones: quienes negociaran a largo plazo con los petroleros, se complicaban en la corrupción inevitable. Y Belaúnde dejó repetir veinte veces los tres meses prometidos.

La propuesta del CAEM exigía la expropiación total y el pago a la empresa, previo descuento de los impuestos y regalías no vertidos a la nación. El gobierno de Belaúnde, en cambio, suscribió un contrato de entrega. Eso, unido a la corrupción generalizada, provocó el golpe. El 3 de octubre, no habían pasado dos meses del acto, los militares derrocaron al gobierno y asumieron como Junta Militar Revolucionaria.

El 3, como se ha dicho, tomaron el poder; el 4 anularon el convenio; el 8 decretaron la expropiación de todos los bienes de la IPC y la inmediata ocupación militar de todas sus instalaciones.

De entonces a ahora van cuatro años largos. El gobierno militar revolucionario resistió a la presión del gobierno de los Estados Unidos, e impuso su voluntad en la cuestión petrolera; lleva adelantada en más de un 50% la reforma agraria; ha nacionalizado la banca; ha convertido en cooperativas los complejos azucareros; modifica ahora la infraestructura de la industria pesquera, una de las principales del país; ha nacionalizado el comercio exterior de productos básicos. Impulsa la enseñanza a todos los niveles, y mediante el SINAMOS lleva adelante una agresiva política de mejoramiento económico, social y ambiental.

El gobierno militar peruano no tuvo apoyo popular. Para el pueblo, el soldado representaba la leva, la prepotencia, la esclavitud. Al nivel de los altos círculos del gobierno, la economía y las finanzas, el poder armado alternaba con la oligarquía y le ofrecía protección vigilante.

Tal vez porque el círculo de los elegidos se estrechó demasiado, tal vez porque el conocimiento objetivo y largamente elaborado de la realidad nacional, obró como factor de transformación, tal vez porque el servilismo al capital extranjero y a sus agentes nacionales llegó al asco; lo cierto es que el ejército peruano definió una línea de acción revolucionaria y se lanzó por ella.

Eso es lo que queríamos decir —porque lo hemos vivido de cerca, antes y después, en la sierra, en la selva, y en la costa peruanas— a quienes, después de la turbulenta semana pasada, intuyen similitudes, y creen en engañosas comparaciones.

Se nos ocurre, además, que los que buscan más allá de los Andes los signos que permitan una comparación, podrían ahorrar distancia: al otro lado del río tenemos un ejemplo que cuadra mejor con nuestra realidad.